

Cobre robado: crimen organizado que nos deja a oscuras

El reciente desbaratamiento de una red dedicada al robo, procesamiento y exportación ilegal de cobre vuelve a poner en evidencia una realidad incómoda y persistente: el avance del crimen organizado en delitos que, aunque a veces se perciben como "menores", tienen un impacto directo y profundo en la vida cotidiana de las personas.

La investigación —de alcance nacional— no solo revela una estructura delictual compleja, con roles definidos, empresas de fachada y rutas de comercialización internacional, sino también confirma algo aún más preocupante: la vulnerabilidad de infraestructura crítica y la capacidad de estas bandas para operar durante largos periodos sin ser detectadas.

En la provincia de Biobío, este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible y dañino. El robo de cables eléctricos ha dejado a miles de familias sin suministro, ha afectado servicios esenciales y ha generado pérdidas económicas significativas. Detrás de cada metro de cable sustraído no solo hay un delito patrimonial, sino una cadena de consecuencias que golpea directamente a comunidades enteras, especialmente en sectores rurales.

Lo que antes podía entenderse como acciones aisladas hoy responde a verdaderas organizaciones criminales. La incautación de toneladas de cobre, el decomiso de bienes, armas y millonarios montos de dinero dan cuenta de una industria ilícita altamente rentable, que encuentra en la demanda internacional un incentivo permanente. El cobre robado no se queda en Chile: se

inserta en mercados globales, dificultando aún más su trazabilidad y persecución.

Si bien el trabajo coordinado entre fiscalías y policías ha demostrado ser eficaz en este caso, la magnitud del fenómeno exige una respuesta integral. Es necesario avanzar en regulaciones más estrictas para el mercado de la chatarra, fortalecer los sistemas de trazabilidad de metales y fiscalizar con mayor rigor a las empresas que podrían estar —directa o indirectamente— facilitando estas operaciones.

Asimismo, resulta clave reforzar la prevención, experiencias como la mesa de coordinación entre empresas eléctricas, autoridades y comunidades, contribuye sin duda a detectar patrones, anticipar delitos y reducir su impacto. Sin embargo, estos esfuerzos deben contar con respaldo institucional.

En este contexto, la provincia de Biobío aparece como un territorio particularmente sensible. Su extensión, su red de infraestructura y su actividad productiva la convierten en un blanco atractivo para estas organizaciones. Por lo mismo, lo ocurrido no puede ser visto como un hecho aislado, sino como una señal de alerta.

Combatir el robo de cobre no es solo una tarea policial: es un desafío de seguridad pública, de desarrollo y de protección de la calidad de vida. Porque mientras estas redes operan, no solo se roban cables; se interrumpe la vida de las personas y se instala la sensación de vulnerabilidad. Y eso, sin duda, es un costo que ninguna comunidad debiera seguir asumiendo.